Oficina Andaluz de lucha contra el fraude

La Oficina es una **entidad de derecho público**, adscrita al Parlamento de Andalucía, que **actúa con plena autonomía e independencia** y sus fines son prevenir y erradicar el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses o cualquier otra actividad ilegal que perjudique los intereses públicos de Andalucía.

Artículos 1 al 4:

Artículo 1: Finalidad y objeto

1. **Finalidad:** La Ley tiene como finalidad **prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción** en el ámbito del sector público andaluz, fortaleciendo la ética pública y la integridad.
2. **Objeto:** a) **Creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción** (en adelante, "Oficina") y regulación de su procedimiento para investigar hechos constitutivos de fraude, corrupción, conflictos de interés y cualquier actividad ilegal que afecte los intereses públicos o financieros. b) Establecimiento de un **régimen de protección** para las personas denunciantes que informen sobre estos hechos. c) Regulación de un **régimen sancionador** de las acciones y omisiones tipificadas como infracciones en esta Ley.

Artículo 2: Definiciones

1. **Fraude:** Actuación intencionada de **engaño** para obtener ganancias o beneficios ilegítimos mediante el uso irregular o ilegal de fondos o patrimonios públicos.
2. **Corrupción:** Abuso de poder para conseguir **ganancias ilícitas**, ya sea con fondos públicos, en conflictos de interés, o mediante el uso indebido de información derivada de funciones públicas.
3. **Conflicto de intereses:** Situación en que el ejercicio imparcial de funciones públicas se ve influenciado por **intereses personales, familiares o de afinidad económica o política**.
4. **Sector público andaluz:** Comprende la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias, consorcios, sociedades públicas, fundaciones, y universidades públicas, entre otros.

Artículo 3: **Ámbito objetivo de aplicación** La Ley se aplica al:

1. **Sector público andaluz**, incluyendo las instituciones y órganos mencionados en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2. **Entidades locales** de la Comunidad Autónoma.
3. **Universidades públicas andaluzas** y sus entidades vinculadas.
4. **Entidades privadas** que mantengan contratos, subvenciones o relaciones económicas con el sector público.

Artículo 4: **Ámbito subjetivo de aplicación** La Ley se aplica a:

1. Personas que presten servicios en el **sector público andaluz**, instituciones, órganos y universidades públicas.
2. **Personas físicas y jurídicas denunciantes**, en los términos de la Ley.
3. Personas vinculadas a entidades privadas que colaboren con el sector público.

Artículos 6 al 12:

Artículo 6: Creación de la Oficina

1. Se crea la **Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción** como entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.
2. La Oficina estará adscrita al **Parlamento de Andalucía** para garantizar su autonomía e independencia funcional frente al poder ejecutivo.

Artículo 7: Finalidad de la Oficina La Oficina tiene por objeto:

1. Prevenir y erradicar el **fraude**, la **corrupción** y los conflictos de interés en el sector público andaluz.
2. Proteger a las personas denunciantes.
3. Promover la **ética pública** mediante la creación de un código de buenas prácticas en la gestión pública.

Artículo 8: Régimen jurídico

1. La Oficina se regirá por esta Ley y su normativa de desarrollo.
2. Tendrá un **reglamento interno** que regulará su organización y funcionamiento.

Artículo 9: Funciones de la Oficina

1. Realizar investigaciones e inspecciones sobre fraudes y conflictos de interés.
2. Proteger los derechos de las personas denunciantes.
3. Formular propuestas para prevenir el fraude y fomentar buenas prácticas en la gestión pública.
4. Colaborar con otros órganos de control, como la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal.

Artículo 10: Funciones en la Administración Local

1. La Oficina investigará casos en la **Administración local** respetando el principio de autonomía local.
2. Podrá dictar resoluciones motivadas que impliquen la remisión de investigaciones a los órganos competentes.

Artículo 11: Funciones en universidades públicas

1. Similar a las funciones en la Administración local, respetando la **autonomía universitaria**.
2. Establecerá convenios y protocolos con las universidades para mejorar la prevención del fraude.

Artículo 12: Delimitación de funciones

1. Las funciones de la Oficina se desarrollarán sin interferir en las competencias de otros órganos como el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía o el Ministerio Fiscal.
2. Si se identifican indicios de delito, se suspenderán las investigaciones y se remitirá el caso a la autoridad judicial.

Artículos 16 al 20:

Artículo 16: Potestades de investigación e inspección

1. La Oficina puede investigar y revisar actos relacionados con fraude o corrupción, siempre bajo los principios de **necesidad y proporcionalidad**.
2. Las potestades se aplicarán exclusivamente a las relaciones que mantengan las entidades investigadas con el sector público andaluz.

Artículo 17: Potestad de investigación

1. La Oficina podrá:
 - Realizar entrevistas personales a personas relacionadas con los casos.
 - Requerir información financiera a entidades bancarias sobre transacciones vinculadas con el sector público.
 - Solicitar documentos y realizar copias de los mismos para el esclarecimiento de los hechos.

Artículo 18: Potestad de inspección

1. Permite el acceso a dependencias públicas o privadas para examinar documentos o equipos.
2. En el caso de entidades privadas, se requiere el consentimiento del titular o una autorización judicial.

Artículo 19: Derechos de las personas investigadas

1. Las personas investigadas gozarán de derechos fundamentales como la **presunción de inocencia** y la **asistencia letrada**.
2. Podrán solicitar la reparación de daños si se demuestra que las actuaciones de la Oficina fueron infundadas.

Artículo 20: Inicio del procedimiento de investigación

1. El procedimiento puede iniciarse de oficio por la Oficina, a petición razonada de instituciones, o mediante denuncia.
2. Las denuncias deberán incluir la identidad del denunciante (excepto si son anónimas), los hechos denunciados y, si es posible, la identificación de las personas responsables.

Artículo 40: Competencia sancionadora y procedimiento

1. **Inicio del procedimiento sancionador:**
 - Se inicia de oficio por acuerdo de la Dirección de la Oficina, cuando se determine la posible comisión de una infracción administrativa al concluir un procedimiento de investigación.
 - La instrucción se realiza por la Subdirección de la Oficina competente en investigación y régimen sancionador.
2. **Órgano competente:**
 - La Dirección de la Oficina es responsable de imponer sanciones.
3. **Normativa aplicable:**

- El procedimiento se desarrollará según lo dispuesto en el Título IV de la Ley 9/2007, la Ley 39/2015, y el Título Preliminar de la Ley 40/2015.
- Debe notificarse una resolución expresa en un plazo máximo de **seis meses** desde el acuerdo de inicio.

Artículo 41: Responsabilidad

1. Sujetos sancionables:

- Administraciones públicas, instituciones, órganos, entidades, personas físicas y jurídicas privadas comprendidas en los artículos 3 y 4 de la Ley.
- Serán responsables de infracciones cometidas por **dolo o culpa**.

Artículo 42: Concepto y clases de infracciones

1. Definición:

- Se consideran infracciones sancionables las acciones u omisiones tipificadas en la Ley.

2. Clasificación:

- Las infracciones se clasifican en **muy graves, graves y leves**, según el daño causado, la intencionalidad, y la afectación a los intereses públicos.

Artículo 43: Infracciones muy graves

1. Definición:

- Incumplimiento doloso del deber de colaboración con la Oficina cuando resulte en perjuicios graves para la investigación.
- Coacción a las personas que presten servicios en la Oficina.
- Formulación de denuncias falsas, tergiversadas o ilícitas con dolo, que vulneren derechos fundamentales.

2. Ejemplos específicos:

- Vulneración grave de los derechos de las personas denunciantes, causando perjuicios en su entorno laboral o personal.
- Negativa a reparar represalias sufridas por los denunciantes.

Artículo 44: Infracciones graves

1. Ejemplos:

- Incumplimiento del deber de colaboración sin dolo.
- Presentación de denuncias falsas sin dolo.
- Impedir la presentación de denuncias ante la Oficina.
- Vulneración del derecho a protección de denunciante, sin llegar a causar daños graves.

Artículo 45: Infracciones leves

1. Ejemplos:

- Falta de diligencia en la custodia de documentos relevantes.

- Incumplimiento del deber de denuncia o de respuesta a requerimientos menores de la Oficina.

Artículo 46: Sanciones

1. Cuantías de las sanciones económicas:

- **Infracciones muy graves:** Multas entre **30.001 y 100.000 euros**.
- **Infracciones graves:** Multas entre **3.001 y 30.000 euros**.
- **Infracciones leves:** Apercibimiento o multas entre **300 y 3.000 euros**.

2. Tramos:

- Para cada nivel de gravedad, se establecen dos tramos dependiendo de la severidad de la infracción.

Artículo 47: Graduación de las sanciones

1. Criterios de graduación:

- **Reincidencia:** Comisión de infracciones similares en el plazo de un año.
- **Daño a los intereses públicos:** Se evaluará la trascendencia de los perjuicios causados.
- **Grado de culpabilidad:** Se tendrá en cuenta la intencionalidad o negligencia.
- **Reparación de daños:** La subsanación voluntaria durante el procedimiento puede considerarse un atenuante.

2. Proporcionalidad:

- Las sanciones deben ajustarse a la gravedad de la infracción, asegurando que el incumplimiento no resulte más beneficioso que el cumplimiento de la norma.

Caso práctico: Simulación sobre cómo presentar una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción

Situación:

Un funcionario público llamado Carlos trabaja en una agencia de servicios sociales del sector público andaluz. Carlos ha identificado irregularidades en la concesión de subvenciones a una entidad privada, que parece ser gestionada por familiares de un alto cargo. Las subvenciones se otorgan sin cumplir los requisitos legales, y Carlos decide presentar una denuncia ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

Preguntas del caso práctico:

1. ¿Qué pasos iniciales debe seguir Carlos para presentar una denuncia ante la Oficina?

- a) Redactar una denuncia con su identidad y los hechos detallados.
- b) Presentar la denuncia en cualquier juzgado de guardia.
- c) Enviar un correo electrónico al Ministerio de Justicia.
- d) Llamar anónimamente al Parlamento de Andalucía.

2. ¿Puede Carlos mantener confidencial su identidad en la denuncia?

- a) No, la Oficina siempre revelará su identidad.
- b) Sí, puede solicitar confidencialidad para protegerse de represalias.
- c) Solo si lo autoriza el director de la Oficina.

d) Solo si no se trata de un alto cargo.

3. ¿Qué canales debe usar Carlos para presentar su denuncia?

- a) A través de los canales diseñados por la Oficina, que garantizan seguridad y confidencialidad.
- b) Publicarla en medios de comunicación.
- c) Mandar un correo electrónico sin firmar al Ayuntamiento.
- d) Realizar una protesta pública.

4. ¿Qué derechos tiene Carlos al presentar la denuncia?

- a) Ser informado del estado del procedimiento y no sufrir represalias.
- b) Ser indemnizado automáticamente.
- c) Escoger el juez que llevará el caso.
- d) Retirar su denuncia en cualquier momento.

5. ¿Qué tipo de represalias podrían considerarse contra Carlos si denuncia?

- a) Perder su puesto de trabajo.
- b) Recibir amenazas directas.
- c) Disminución de sus condiciones laborales.
- d) Todas las anteriores.

6. ¿Qué ocurre si Carlos denuncia de manera anónima?

- a) La Oficina no tramitará la denuncia.
- b) La Oficina estará obligada a investigarla si cumple los requisitos legales.
- c) La denuncia solo se investigará si se presenta ante un juez.
- d) Carlos deberá revelar su identidad en caso de que la investigación avance.

7. ¿Qué puede hacer Carlos si teme represalias en su entorno laboral?

- a) Solicitar un traslado provisional a otro puesto de trabajo.
- b) Renunciar a su empleo.
- c) Pedir que la denuncia no se investigue.
- d) Cambiar de sector laboral.

8. Si Carlos identifica que su denuncia contiene un error en la apreciación de los hechos, ¿perdería su protección?

- a) Sí, automáticamente.
- b) No, si actuó con motivos razonables y diligencia al denunciar.
- c) Sí, si la persona investigada lo solicita.
- d) No, pero deberá indemnizar al afectado.

9. ¿Qué debe hacer la Oficina si encuentra indicios de un delito en la denuncia de Carlos?

- a) Archivar la denuncia.
- b) Trasladar el caso al Ministerio Fiscal o al órgano judicial competente.
- c) Resolver directamente el caso.
- d) Rechazar la denuncia por falta de competencias.

10. ¿Qué sucede si Carlos presenta información falsa en la denuncia?

- a) Podría ser sancionado por la Oficina.
- b) La denuncia será archivada automáticamente.
- c) Podría enfrentarse a acciones judiciales.
- d) Ambas a) y c).

Resumen Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción:

Artículo 3: Ámbito personal de aplicación

1. **Sujetos protegidos:** La Ley se aplica a todas las personas físicas que informen, en un contexto laboral o profesional, sobre infracciones normativas graves. Esto incluye:
 - Trabajadores del sector público o privado.
 - Autónomos, accionistas y miembros de órganos de administración o supervisión de empresas.
 - Voluntarios, becarios y candidatos en procesos de selección.
2. **Extensión de la protección:**
 - Personas relacionadas con el informante, como compañeros de trabajo o familiares.
 - Entidades jurídicas donde el informante tenga una participación significativa.

Artículo 4: Comunicación de infracciones a través del Sistema interno de información

1. **Cauce preferente:** Las infracciones deben ser comunicadas preferentemente a través de los **Sistemas internos de información**, salvo que el denunciante considere que existe un riesgo de represalia o falta de acción.
2. **Obligatoriedad:** Las entidades obligadas deben contar con estos sistemas, asegurando su gestión adecuada.

Artículo 7: Canal interno de información

1. **Requisitos de funcionamiento:**
 - Debe permitir la presentación de comunicaciones por **escrito** (correo electrónico, postal, etc.) y **verbalmente** (teléfono o reuniones presenciales).
 - Las reuniones presenciales deben agendarse en un plazo máximo de siete días tras la solicitud del informante.
2. **Confidencialidad y anonimato:**
 - Garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante.
 - Se permite la presentación de denuncias **anónimas**.

Artículo 16: Comunicación a través del canal externo de información de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.

1. **Competencia para recibir denuncias:**
 - Toda persona física puede informar sobre infracciones a través del **canal externo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.)** o ante las autoridades autonómicas correspondientes.
 - La denuncia puede presentarse directamente o tras haber sido canalizada previamente a través de un **Sistema interno de información**.
2. **Garantías de confidencialidad y anonimato:**
 - El canal externo permite realizar denuncias garantizando la **confidencialidad absoluta** de la identidad del informante.

- También admite **denuncias anónimas**, siempre que puedan ser gestionadas de forma efectiva.

3. Tramitación descentralizada:

- En el ámbito autonómico, las referencias a la A.A.I. se aplican a las **autoridades autonómicas competentes**, según las atribuciones otorgadas en cada comunidad autónoma.

Artículo 24: Informaciones sujetas a la competencia de las autoridades independientes de protección a informantes

1. **Competencia:** La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) gestiona denuncias que afectan:
 - A la Administración General del Estado y el sector público estatal.
 - Al sector privado, cuando las infracciones tienen impacto en varias comunidades autónomas.
2. **Canales autonómicos:** En el ámbito autonómico y local, las competencias corresponden a las autoridades independientes designadas en cada comunidad autónoma.

Artículo 28: Condiciones de protección para revelaciones públicas

1. **Protección:** Se garantiza la protección del denunciante cuando:
 - La información ya fue presentada por los canales internos o externos sin resultados adecuados.
 - Exista un **peligro inminente o manifiesto** para el interés público, como situaciones de emergencia o riesgos de daños irreversibles.
2. **Revelaciones directas a medios:** En casos excepcionales, se protegen las denuncias hechas directamente a la prensa, en ejercicio del derecho a la **libertad de expresión**.

Artículo 33: Preservación de la identidad del informante y de las personas afectadas

1. **Confidencialidad absoluta:** Se prohíbe revelar la identidad del informante, salvo autorización expresa de este o por orden judicial.
2. **Excepciones reguladas:**
 - La identidad solo puede ser revelada a la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal o una autoridad administrativa competente en el marco de una investigación penal o disciplinaria.

Artículo 35: Condiciones de protección del denunciante

1. **Requisitos para la protección:**
 - El denunciante debe actuar con **motivos razonables** para pensar que la información es veraz.
 - La denuncia debe ajustarse a los procedimientos establecidos por la Ley.
2. **Exclusiones:** No se aplicará protección si:
 - La denuncia contiene información tergiversada o falsa.
 - Se trata de conflictos interpersonales no vinculados al interés público.

Artículo 36: Prohibición de represalias

1. **Definición de represalias:**

- Actos como despidos, degradaciones, daños económicos, discriminación, y cualquier acción que afecte negativamente al denunciante por su denuncia.
2. **Nulidad de represalias:**
- Todo acto de represalia es declarado nulo de pleno derecho y puede dar lugar a indemnizaciones para el denunciante.

Artículo 37: Medidas de apoyo al denunciante

1. **Derechos del denunciante:**

- Asistencia legal gratuita en procesos judiciales relacionados con la denuncia.
- Asesoramiento independiente sobre derechos y recursos.
- Apoyo psicológico y, en casos excepcionales, financiero, cuando el impacto de la denuncia lo justifique.

Artículo 65: Sanciones por infracciones

1. **Categorías de sanciones:**

- **Muy graves:** Multas de hasta 1.000.000 euros para personas jurídicas y 300.000 euros para personas físicas.
- **Graves:** Multas menores, acompañadas de sanciones como inhabilitación temporal para recibir contratos públicos.
- **Leves:** Multas y apercibimientos.

2. **Publicación de sanciones:** Las sanciones más graves pueden publicarse para fomentar la transparencia y prevenir futuras infracciones.

Artículos 66 al 68: Graduación y prescripción de infracciones

1. **Graduación de sanciones:**

- Se valoran factores como la reincidencia, el daño causado, la intención y las medidas correctivas tomadas por el infractor.

2. **Prescripción:**

- **Muy graves:** Prescriben en tres años.
- **Graves:** Prescriben en dos años.
- **Leves:** Prescriben en seis meses.

Artículos 42 al 48: Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.)

1. **Creación y funciones:**

- La A.A.I. es un ente independiente encargado de gestionar el canal externo de denuncias, proteger a los informantes y promover la cultura de integridad.

2. **Gestión de sanciones:**

- Tramita procedimientos sancionadores y actúa como órgano consultivo en materia de protección a informantes.

3. **Autonomía y recursos:**

- Cuenta con plena autonomía orgánica y funcional, así como con un presupuesto propio financiado por fondos públicos.

4. **Revisión de procedimientos:**

- La A.A.I. revisa periódicamente los procesos de recepción y seguimiento de denuncias para garantizar su eficacia y actualización.

Caso práctico aplicando la normativa estatal Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Caso Práctico Integrado: Denuncia y Protección de Denunciantes según la Ley 2/2021 y Ley 2/2023

Escenario

Un trabajador público llamado Alejandro detecta irregularidades en su departamento. Nota que fondos públicos destinados a la compra de equipos informáticos han sido desviados hacia cuentas personales del director del departamento, con facturas falsas como justificantes. Alejandro quiere denunciar el caso ante la ****Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción**** y desea entender cómo se aplica la protección al denunciante según las leyes vigentes.

Preguntas del caso práctico:

1. ¿Qué canales puede utilizar Alejandro para presentar su denuncia?

- a) Solo puede presentarla verbalmente en la Oficina.
- b) A través del sistema interno de información de su entidad o el canal externo de la Oficina.
- c) Publicar la denuncia en redes sociales.
- d) Informar únicamente de forma presencial ante un juez.

2. Si Alejandro teme represalias, ¿puede presentar su denuncia de forma anónima?

- a) No, debe identificarse en todos los casos.
- b) Sí, el sistema permite denuncias anónimas siempre que sea posible garantizar su gestión.
- c) Solo si lo autoriza el director de la Oficina.
- d) Solo si es testigo directo de un delito penal.

3. ¿Qué derechos tiene Alejandro al presentar su denuncia?

- a) Recibir protección contra represalias y acceso a la información del caso.
- b) Derecho a imponer medidas disciplinarias a los responsables.
- c) Derecho a conocer la identidad de todos los investigados.
- d) No tiene derechos adicionales, solo la obligación de cooperar.

4. ¿Qué tipo de represalias están prohibidas por la ley?

- a) Despidos o degradaciones laborales.
- b) Daños reputacionales o económicos.
- c) Trato discriminatorio o intimidación.
- d) Todas las anteriores.

5. Si Alejandro aporta información incorrecta de buena fe, ¿pierde su protección?

- a) Sí, automáticamente pierde la protección.
- b) No, siempre que tenga motivos razonables para pensar que la información era veraz.
- c) Sí, salvo que pueda probar su error.
- d) Solo si su error afecta gravemente al procedimiento.

6. Si la denuncia de Alejandro resulta en represalias laborales, ¿qué medidas puede solicitar?

- a) Una indemnización inmediata.
- b) Medidas de apoyo, como asesoramiento legal o protección económica.
- c) Que se detenga la investigación.
- d) Que se declare nula la denuncia.

7. ¿Qué autoridad supervisa la gestión del caso si la denuncia afecta a varias comunidades autónomas?

- a) La administración local correspondiente.
- b) La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).
- c) Exclusivamente el Ministerio de Justicia.
- d) Un juez designado por el gobierno.

8. Si Alejandro considera insuficiente el seguimiento de su denuncia, ¿puede optar por la revelación pública?

- a) Sí, pero solo si lo permite la A.A.I.
- b) Sí, si los canales internos y externos no han funcionado adecuadamente o hay peligro inminente.
- c) No, está prohibido divulgar información fuera de los canales establecidos.
- d) Sí, siempre que sea después de 12 meses de iniciada la denuncia.

9. ¿Qué sanciones enfrentan los responsables de represalias contra Alejandro?

- a) Solo una amonestación administrativa.
- b) Multas económicas, inhabilitación o prohibición de contratar con el sector público.
- c) Despido inmediato sin compensación.
- d) Penalización leve por ser un caso excepcional.

10. ¿Qué órgano garantiza la confidencialidad de los datos de Alejandro durante el procedimiento?

- a) El Ministerio Fiscal.
- b) La A.A.I. y los responsables del sistema interno de información.
- c) El director del departamento investigado.
- d) Ninguno, los datos son públicos durante la instrucción.